



**Superservicios**

Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



**DNP**

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



GD-F-008 V.9

Página 1 de 9

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010024435 DEL 10/07/2014**

**POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

#### **I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA, departamento de SANTANDER, es de categoría 6, y fue prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

#### **II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010008495, del 27 de marzo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA, departamento de SANTANDER por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013.



---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

a) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

### **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010008495, del 27 de marzo de 2014.**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010008495, del 27 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA del departamento de SANTANDER mediante el oficio No. SSPD 20144010172131 del 27 de marzo de 2014, el cual fue enviado por correo certificado el 03 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010008495, del 27 de marzo de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010200551 del 11 de abril de 2014. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 25 de abril de 2004 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor Germán Abilio Moreno Estupiñán, en su calidad de alcalde del municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA, del departamento de SANTANDER, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290221422 del 05 de mayo y 20145290240132 del 12 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD SSPD 20144010008495 del 27 de marzo de 2014.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentante con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD SSPD 20145290221422 del 05 de mayo y 20145290240132 del 12 de mayo de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

1. *Por la resolución de la referencia la superintendencia delegada a su cargo desertifca (sic) al municipio de San José de Miranda, por cuanto, señala, que el municipio no cumplió con el requisito adicional, de agotar correctamente (resaltado propio), el procedimiento establecido en los numerales 6.1., y 6.2., del artículo 6 de la ley 142 de 1994. Es decir que para la superintendencia el procedimiento adelantado no se ajustó a lo exigido legalmente. Lo anterior indica que el Municipio adelantó el procedimiento pero la Superintendencia lo descalifica por errores de forma, que en nada afectan lo sustancia del proceso.*
2. *Efectivamente, el municipio de San José de Miranda, dentro del convenio FONADE-MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA (2006) desarrolló el procedimiento para la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.*
3. *Con base en el anterior convenio el Municipio de conformidad con los actos administrativos que lo autorizaban saco (sic) la primera invitación pública, noviembre 15 de 2006, en ella se invita a las personas consagradas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994 para que*

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

presenten oferta para la prestación de servicios. Si bien es cierto que el numeral 6.1 del artículo 6 de la ley 142 de 1994 dice que se debe invitar a las empresas de servicios públicos, esto no significa (sic) que no se haya elaborado correctamente la invitación puesto que el artículo 15 de la ley 142 de 1994 señala que pueden prestar los servicios públicos, "15.1. Las empresas de servicios públicos. (...) ", esto es que efectivamente se invitó a las empresas de servicios públicos.

4. La invitación se surtió a través de los medios previstos, por radio y por notificación a CONFECAMARAS, que eran los medios idóneos para la región.
5. Para la primera invitación se venció el término previsto para el cierre, esto es, el 15 de enero de 2007, sin que se hubiere presentado oferta o proponente alguno.
6. El Municipio de San José de Miranda presenta la segunda convocatoria y allí además de invitar a las personas consagradas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994, convoca a las personas naturales y jurídicas, a los municipios, a las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial y a las organizaciones autorizadas por la ley para prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Se publicó en los medios idóneos de la época.
7. Esta invitación en manera alguna contraviene lo dispuesto por el numeral 6.2 del artículo 6° de la ley 142 de 1994, puesto que de manera general contiene lo requerido por la norma, es decir, están los municipios, se encuentra el departamento y la Nación cuando dice la invitación que se invita a otras entidades de cualquier orden territorial y finalmente la invitación contempla a los públicos y privados. Sin dejar de lado que todas estas personas se encuentran contempladas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994.
8. En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 1° de la ley 142 de 1994, de los principios generales, cuando dice que la ley 142 de 1994 se aplica a los servicios públicos domiciliarios y a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la ley 142 de 1994, es decir que por principio general las personas contempladas en los numerales 6.1. y 6.2 del artículo 6° de la ley 142 de 1994 están contenidas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994.
9. De otro lado todas las normas que desarrollan y reglamentan la ley 142 de 1994, surgieron a la vida a partir de la promulgación de la ley 1176 de 2007 de diciembre 27, en consecuencia todas las directrices que siguió el municipio de San José de Miranda estaban acorde a la interpretación y los medios de la época.
10. Lo anterior significa que el municipio de San José de Miranda cumplió con las invitaciones previstas en el artículo 6° de la ley 142 de 1994.
11. La aplicación de las normas en el procedimiento empleado por el municipio no afecta para nada la eficacia del ordenamiento jurídico, pues guardadas las formas debidas se cumplieron los objetivos.
12. Igualmente de manera prioritaria el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el derecho sustancial, que llevado al presente caso impone que el Municipio de San José de Miranda cumplió no sólo con las condiciones de validez sino también con las de eficacia.
13. En consecuencia en el presente caso no existe conflicto entre las normas aplicadas, pues se deben interpretar de manera conjunta, por ello el principio de que las disposiciones, normas, posteriores que tengan la misma generalidad derogan las anteriores, y vemos como el artículo 15 de la ley 142 de 1994 es posterior al artículo 6° ibidem y a su vez contiene las personas objeto del proceso, en consecuencia no hay incompatibilidad entre las normas aplicadas, además ambas normas son preexistentes.
14. Pido a esa superioridad que de manera analógica se dé el alcance del artículo 6° de la ley 142 de 1994 al procedimiento empleada por el Municipio, no sólo por las explicaciones aquí planteadas sino porque se configura la misma razón.
15. Todos los documentos que soportan el presente recurso se encuentran cargados en el SUI con usuario Alcaldía, en el inspector y en cada uno de los servicios públicos, esto es, acueducto, alcantarillado y aseo, tópico comercial cargue masivo 2012 y 2013.
16. En razón a las obras que viene adelantando la Nación en la vía Troncal del Norte, el municipio expidió CDP para las obras relacionadas con el cambio de redes, por lo que privar al municipio del manejo de los recursos puede afectar el desarrollo de las obras en ejecución.
17. Más sin embargo con el fin de precaver la suspensión de los servicios el Municipio inició nuevamente el procedimiento el cual se encuentra publicado de conformidad con los reportes que se adjuntan.

PETICIÓN.

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

*Con fundamento en los anteriores argumentos ruego a su señoría aceptar los términos de las publicaciones e invitaciones efectuadas por el municipio de San José de Miranda y dar por superado el criterio adicional de que adolece la entidad territorial disponiendo en su lugar que el Municipio agotó los trámites previstos en el artículo 6 de la ley 142 de 1994.*

*De otro lado y para mayor seguridad, de no ser posible lo anterior pido a la superintendencia delegada suspender la ejecución de la resolución que aquí se impugna hasta tanto se termine el procedimiento iniciado nuevamente".*

**3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con los documentos radicados Nos. SSPD 20145290221422 del 05 de mayo y 20145290240132 del 12 de mayo de 2014, por medio de los cuales se sustentaron el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Pantallazos de cargue de información al SUI y en el aplicativo INSPECTOR. (Folios 6-11).

3.3.2. Oficio dirigido por el alcalde de San José de Miranda a CONFECAMARAS de fecha 24 de enero de 2007. (Folio 11).

3.3.3. Certificaciones expedidas por la CAR, regional Santander. (Folios 12-13).

3.3.4. Acuerdo No. 021 de noviembre de 2006, por medio del cual se facultó al alcalde de San José de Miranda, para efectuar la invitación pública para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la cabecera municipal. (Folios 14 y 17-18).

3.3.5. Acta de cierre invitación pública No. 002 del 07 de febrero de 2007. (Folio 15).

3.3.6. Factura de consumo. (Folio 16).

3.3.7. Decreto 028 de 2006, "Por el cual se hace invitación pública a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, definidas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, para que presten esos servicios en la cabecera municipal de San José de Miranda". (Folios 20-21).

3.3.8. Invitación Pública a las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. (Folio 23).

3.3.9. Acta de apertura de invitación pública. (Folio 24).

3.3.10. Invitación Pública a las personas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. (Folio 25).

3.3.11. Documento sin fecha y sin firma dirigido a Voces Rovirences Málaga. (Folio 26).

3.3.12. Oficio dirigido por el alcalde de San José de Miranda a CONFECAMARAS de sin fecha (Folio 27).

3.3.13. Acta de cierre de invitación pública del 15 de enero de 2007. (Folio 28).

3.3.14. Solicitud de emisión radial de cuñas de la invitación pública No. 01. (Folio 29).

3.3.15. Acuerdo No. 001 del 23 de enero de 2007, por medio del cual se facultó al alcalde de San José de Miranda, para reestructurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la cabecera municipal. (Folios 30-31).

3.3.16. Decreto 007 del 24 de enero de 2007, "Por el cual se hace invitación pública a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, definidas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, para que presten esos servicios en la cabecera municipal de San José de Miranda (Santander)". (Folios 34-35).

3.3.17. Oficio dirigido por el alcalde de San José de Miranda a CONFECAMARAS de fecha 24 de enero de 2007. (Folio 36).

3.3.18. Invitación Pública No. 02 dirigida a "Las personas consagradas en el artículo 15 de la mencionada Ley para que se presenten; personas naturales y jurídicas, los municipios cuando asuman en forma directa a través de su administración central, las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial, las organizaciones autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas, en la prestación de este servicio; con sus propuestas para la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo, en la cabecera municipal de San José de Miranda". (Folio 38).

3.3.19. Acta de apertura de invitación pública No. 002 de fecha 24 de enero de 2007. (Folio 39).

3.3.20. Solicitud de emisión radial de cuñas de la invitación pública No. 02. (Folio 40).

3.3.21. Documento sin fecha y sin firma dirigido a Voces Rovirenses Málaga. (Folio 41).

3.3.22. Acta de cierre de invitación pública No. 002 del 07 de febrero de 2014. (Folio 42).

3.3.23. Constancia de "Voces Rovirenses" de emisión de cuñas. (Folio 43).

3.3.24. Acuerdo No. 007 de 2007, "Por medio del cual se crea la Unidad Administradora de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en la cabecera municipal y se conceden facultades al alcalde para su reglamentación". (Folios 45-46).

3.3.25. Constancia de "Voces Rovirenses" de emisión de cuñas. (Folio 50).

3.3.26. Pantallazo del Sistema Electrónico de Contratación Pública. (Folios 52-53).

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

#### **IV. ANÁLISIS DE FONDO**

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

##### **4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.**

El representante del ente territorial manifiesta en su escrito de reposición que las personas contempladas en los numerales 6.1. y 6.2 del artículo 6° de la ley 142 de 1994 están contenidas en el artículo 15 de la ley 142 de 1994, y que por consiguiente la invitación que realizó del numeral 6.2 invitando a las personas señaladas en el artículo 15, no contraviene lo dispuesto en el artículo 6.

Manifiesta que no existe conflicto entre las normas aplicadas, porque deben interpretarse de forma conjunta, citando que *"normas, posteriores que tengan la misma generalidad derogan las anteriores, y vemos como el artículo 15 de la ley 142 de 1994 es posterior al artículo 6° ibidem y a su vez contiene las personas objeto del proceso, en consecuencia no hay incompatibilidad entre las normas aplicadas, además ambas normas son preexistentes"*.

De cara a los argumentos expuestos por el recurrente, este despacho considera oportuno traer a colación lo preceptuado por la Ley 142 de 1994 en su artículo 6°:

*"Artículo 6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:*

*6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;*

*6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada (...)"*.

Ahora bien, el Decreto 1639 de 2013 en su artículo 5° dispone como uno de los criterios que deben cumplir los municipios prestadores directos:

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

"Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al Departamento, a la Nación y a otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2).

2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 de la Ley 142 de 1994.

3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio".

Con base en lo señalado, se advierte que para que un municipio pueda entrar a prestar de manera directa los servicios públicos domiciliarios que necesite, debe agotar el siguiente procedimiento:

- En relación con las invitaciones:

1. En primera instancia, hacer una invitación pública a las empresas de servicios públicos constituidas, para que si alguna empresa está interesada, ofrezca la prestación del servicio(s) requerido(s). (Numeral 6.1)

2. En segunda instancia, es decir, no existiendo empresas que se ofrezcan a prestar el (los) servicio(s), debe hacer una invitación a otros municipios, al Departamento del cual hace parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas con el fin de organizar una empresa de servicios públicos. (Numeral 6.2)

Ahora bien, en la Circular Externa No. 001 de 2010, esta superintendencia al analizar el agotamiento del artículo 6º de la Ley 142 de 1994, señaló específicamente frente a las invitaciones:

*"Para tal efecto, los municipios deberán sujetarse de manera estricta al procedimiento establecido en el Artículo 6 de la Ley 142 de 1994. Conforme a esta norma, la primera invitación pública se hace a las empresas de servicios públicos debidamente constituidas, con el fin de determinar si existe alguna empresa que se ofrezca a prestarlo.*

*Agotado previamente el trámite del numeral 1 del Artículo 6 y no habiendo empresas que se ofrezcan a prestarlo, se hará una segunda invitación a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas con el fin de organizar una empresa de servicios públicos que preste dichos servicios."* (La subraya es nuestra).

Ahora bien, habida cuenta que el recurrente ataca el análisis efectuado por esta SSPD a los documentos que cargó en el SUI para demostrar el agotamiento del numeral 6.2 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994; esta entidad sólo revisará y analizará lo atinente a dicha invitación en esta decisión, y mantendrá incólume lo relativo a la invitación de que trata el numeral 6.1 del referido artículo.

Revisado nuevamente el SUI, se estableció que el ente municipal reportó en el aplicativo INSPECTOR el 30 de julio de 2012, y en el SUI, el 28 de julio de 2013, el siguiente documento relativo a la invitación pública del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994:

Revisada la anterior invitación, se establece que no se ajusta a las previsiones indicadas en el artículo 6º de la Ley 142 de 1994 en su numeral 6.2.

En efecto, el citado artículo 6º establece que los municipios que vayan a realizar la invitación del numeral 6.2, deben dirigirla a las personas que de forma expresa y específica menciona dicha norma, es decir, extenderse a otros municipios, al departamento del cual hacen parte el municipio, en este caso al departamento de Santander, a la Nación y a otras personas públicas o privadas.

A su vez, el artículo 15, ibídem, indica qué personas pueden prestar servicios públicos y para tal efecto realizó un listado de las mismas.

Sin embargo, el municipio de San José de Miranda dirigió la invitación del numeral 6.2 a todas las personas mencionadas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, argumentando, para justificar dicha

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

situación, que los artículos 6° y 15 deben interpretarse de manera conjunta, y *“que las normas posteriores que tengan la misma generalidad derogan las anteriores, y vemos como el artículo 15 de la ley 142 de 1994 es posterior al artículo 6° ibidem y a su vez contiene las personas objeto del proceso, en consecuencia no hay incompatibilidad entre las normas aplicadas, además ambas normas son preexistentes”*.

De cara a lo afirmado por el recurrente, esta entidad considera que si observamos las dos normas mencionadas, nos encontramos frente a una con reglamentación especial (artículo 6°), y a otra con regulación genérica (artículo 15).

En estas condiciones, para establecer cuál prevalece, debe acudirse al criterio de especialidad señalado en el artículo 10 del Código Civil, modificado por el artículo 5° de la ley 57 de 1887, el cual dispone: “(...) 1.- La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general (...)”.

Bajo este precepto, tiene prelación la norma que pormenoriza una situación, respecto de una norma de contenido genérico; así lo ha sostenido la Corte Constitucional<sup>1</sup> en el siguiente pronunciamiento:

*“El artículo 5° de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra; prevalece sobre aquella, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido es contrario al de una norma anterior resulta ésta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3° de la Ley 153 de 1887 y 5° de la Ley 57 del mismo año”*.

Por consiguiente, el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, por regular una materia especial (procedimiento que deben agotar los municipios que vayan a prestar directamente los servicios públicos domiciliarios, señalando taxativamente a quiénes se deben dirigir las invitaciones), prevalece sobre el artículo 15 de la misma Ley (norma genérica que menciona quiénes pueden prestar los servicios públicos), de ahí que no sean de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente.

A lo anterior se suma que el legislador diferenció en el artículo 6°, ibidem, el objeto que se persigue con las invitaciones de los numerales 6.1 y 6.2.

En efecto, en la invitación del numeral 6.1 se indicó de forma expresa que debía dirigirse a las empresas de servicios públicos ya existentes, para que asumieran la prestación de los servicios requeridos en el ente territorial; y en la invitación del numeral 6.2, señaló que ésta debía formularse a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos que prestara los servicios públicos en el municipio.

No obstante la diferencia de los objetos de las invitaciones que estipuló la Ley 142 de 1994, el municipio de San José de Miranda no solo no dirigió la invitación de que trata el numeral 6.2 a las personas que expresamente allí se indican, sino que el objeto de dicha invitación se apartó del establecido en la referida Ley, tal y como se expone a continuación:

El artículo segundo del Decreto No. 007 de 2007, (acto administrativo que contiene la invitación del numeral 6.2 realizada por el municipio de Miranda), dispuso que la invitación tenía como objeto que las personas referidas en el artículo 15, presentaran ofertas *“con el fin de que asuma la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la cabecera municipal”*, es decir, señaló el objeto de la invitación del numeral 6.1 y se apartó del objeto que establece la Ley 142 de 1994 para el numeral 6.2, el cual está dirigido a organizar una empresa de servicios públicos en el municipio, como quedó visto.

En consideración a lo anterior, al no ajustarse la referida invitación a los parámetros que dispone la Ley de Servicios Públicos (en cuanto a los sujetos y el objeto), esta SSPD no puede acreditar el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013, toda vez que si la invitación del numeral 6.2 no cumplió con lo dispuesto legalmente, como se demostró, por sustracción de materia, la publicación y el cierre de dicha invitación pública no pueden tenerse como válidos para el agotamiento del citado numeral.

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional Sentencia No. C-005/96

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

Por consiguiente, este criterio no lo cumplió el municipio de San José de Miranda, porque con los documentos que cargó en el SUJ, no agotó correctamente el trámite previsto por el numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

#### **4.2. Otras consideraciones.**

##### **- Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.**

Es necesario aclarar que según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales. Sobre este tema la Corte se pronunció() y aclaró lo siguiente:

*"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas(...)"*

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no cumplió todos los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En consecuencia, no son de recibo los argumentos del recurrente cuando afirma que esta superintendencia violó el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

##### **- De los efectos de la descertificación.**

Teniendo en cuenta que el recurrente señala que la descertificación contenida en la Resolución recurrida, afectará el desarrollo de las obras que se encuentran en ejecución, este Despacho debe aclarar que la Ley 1176 de 2007 en su artículo 4°, definió los aspectos que para efectos del proceso de certificación para la administración de los recursos del SGP los municipios y distritos debían acreditar. Así mismo, el artículo 5° de la mencionada Ley estableció como efectos de la descertificación los siguientes:

*"Los distritos y municipios que sean descertificados no podrán administrar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, ni tampoco realizar nuevos compromisos con cargo a los mismos, a partir de la fecha de la descertificación. En este evento, los recursos serán administrados por el respectivo departamento, el cual asumirá la competencia en cuanto a asegurar la prestación los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural, conforme con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 142 de 1994. Para ello, el departamento tendrá el derecho a utilizar la infraestructura pública existente en el municipio con el fin de asegurar la prestación de estos servicios públicos en la correspondiente jurisdicción. En ningún caso se realizará la transferencia de la propiedad de los activos del sector, y corresponderá al departamento representar al municipio en las empresas, sin perjuicio de que este participe con voz pero sin voto.*

*Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 8.6 del artículo 8°, de la Ley 142 de 1994, en cuyo evento la Nación tendrá a su cargo la competencia en cuanto a asegurar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, la administración de los recursos y el derecho a utilizar la infraestructura pública existente.*

*La administración de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico y la competencia en la prestación de estos servicios, serán reasumidos por el Distrito y/o Municipio, a partir de la certificación. En este evento, el distrito y/o municipio dará continuidad a los compromisos y al esquema de prestación de los servicios que hubiere asumido y definido el departamento en virtud de lo dispuesto en la presente ley".*

---

2 Corte Constitucional. Sentencia C-1512 del 8 de noviembre 2000. MP Álvaro Tafur Galvis



**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

Teniendo en cuenta que los efectos de la descertificación se encuentran señalados en la Ley 1176 de 2007 y reglamentados en el Decreto 1040 de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deben ser aplicados cuando esta superintendencia decida que un municipio es descertificado, y por lo tanto está revestido del principio de legalidad.

Es necesario aclarar que los mencionados actos administrativos son actos jurídicos de carácter general, que contienen mandatos que se presumen ajustados a la ley mientras no sea declarada su nulidad o suspensión por la jurisdicción, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, con el recurso de reposición no se puede pretender que lo señalado en una Ley no tenga aplicación y menos aún, que sea atacada su constitucionalidad y legalidad.

- De la solicitud de suspensión de la Resolución SSPD 20144010008495 del 27 de marzo de 2014.

El impugnante solicita la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida *"hasta tanto se termine el procedimiento iniciado nuevamente"*, esta petición debe resolverse negativamente, por ser improcedente, atendiendo que este procedimiento administrativo cuenta con etapas y términos preclusivos que no puede desconocer esta SSPD; a lo que se agrega que el Decreto 1639 de 2013, no estableció ninguna causal de suspensión del presente proceso de certificación, por consiguiente y en cumplimiento del trámite establecido para esta actuación administrativa, no se accede a la solicitud del recurrente.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Germán Abilio Moreno Estupiñán como alcalde municipal de San José de Miranda, departamento de Santander, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20144010008495, del 27 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de SAN JOSÉ DE MIRANDA, departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.

  
**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**  
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e información

Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094017312481007A